

(III) una nueva distribución de las fuerzas político-ideológicas en la sociedad chilena, donde todos los actores principales pugnan por encontrar una legitimidad democrática para sus posiciones, disminuyen su perfil «doctrinarista» y buscan cooperar para hacer posible una transición moderada. En el hecho, los grandes partidos — Renovación Nacional por la derecha, la Democracia Cristiana al centro y el Partido Socialista en la izquierda— definen ahora sus pretensiones ideológicas en términos de programas de acción y reformas, postergando los contenidos más utópicos y globalizantes de sus propuestas en aras de una competencia limitada por las exigencias de cooperación.

## Mutaciones de la cultura democrática

La cultura democrática estuvo asociada en Chile tradicionalmente a un sistema polarizado de partidos altamente ideológicos que pugnan por regular el desarrollo económico mediante el uso de las palancas del Estado, generándose así una compleja trama de relaciones político-económicas en que los partidos desempeñaban el rol de intermediarios y de promotores de intereses sectoriales, corporativo-gremiales o de clase.

De este modo, la cultura política democrática se movía en dos planos que tenían escasamente que ver entre sí. Por un lado, en la esfera pública, la proclamación de objetivos partidistas intensamente ideológicos de transformación de la sociedad, los que eran tolerados, por el otro lado, en función de un pragmatismo práctico-político que operaba a través de una fusión entre las esferas pública y social dándose lugar así a una suerte de «corporativismo-político» regulado por un Estado-benefactor siempre propenso al déficit fiscal y a políticas monetarias laxas que alimentaban los sucesivos ciclos de inflación, estagnamiento y recesión.

Este arreglo económico-social y político, que estaba en la base de una cultura política aparentemente tolerante pero fuertemente divisiva y polarizadora, se vio abruptamente interrumpido al llegar el presidente Allende y la Unidad Popular al gobierno. Por primera vez en varias décadas, efectivamente, dicho gobierno se propone redistribuir masivamente la propiedad, el poder y el prestigio en favor de los sectores populares, acompañando dicha operación por un discurso revolucionario que hacía presagiar un drástico cambio en la naturaleza de la sociedad y el Estado.

La polarización latente de la cultura política chilena se expresó de ahí en adelante por una batalla campal, en todos los frentes, que terminaría por desquiciar la organización normal de la economía, de la vida cotidiana de los individuos y que amenazaría con la trizadura de todo el andamiaje institucional, comprometiendo en dicha marejada a las Fuerzas Armadas, las iglesias, las universidades, los gremios profesionales y patronales, los sindicatos, las organizaciones vecinales y los medios de comunicación masivos.

El propio entramado normativo de la sociedad cedió bajo esa enorme presión, preparándose así el terreno no sólo para el golpe militar sino, además, para la prolongada descarga posterior de violencia estatal sobre los individuos, grupos, partidos y movimientos que aparecían identificados con el Gobierno derrocado.

Entre tanto, los cambios ocurridos durante los últimos 20 años en la sociedad chilena, así como las precariedades de su previa cultura política democrática, hacen difícil pensar que estaría en marcha, ahora, un proceso de reencuentro con (o de reconquista de) esa cultura política anterior a 1973.

Asistimos, por el contrario, a la fase formativa de una nueva cultura política democrática, cuyos ejes de composición parecen ser:

I) la noción de *ciudadanía* como centro de esa cultura, en torno a la doble expresión del individuo-económico y del sujeto participante dotado de derechos;

II) la existencia de un *sistema de varios partidos* que monopolizan entre sí la proporción mayor del activismo político, pero lo encauzan esta vez dentro de subculturas partidarias que se proclaman y son vividas como menos intensas, más centradas en programas y de contenidos utópicos más reducidos y menos totalizantes;

III) un papel más acotado de la *esfera política* en su relación con la economía, la sociedad y la cultura, ámbitos estos últimos que se han tornado más independientes, más autocentrados y más complejos. Por lo tanto, más resistentes a su absorción por la política y los partidos;

IV) una orientación de las *demandas democráticas* que se aleja de los consabidos tópicos de la «participación» por medio de la acción colectiva y de las anteriores exigencias de redistribución del balance del poder entre las clases sociales y que se acerca más, por el contrario, a la reclamación institucional por beneficios sociales, especialmente de salud, vivienda, educación, preservación del medio ambiente, y de orden y seguridad urbanos;

V) un sentimiento difundido de *incorporación a la modernidad* (material y simbólica), con su secuela «sociológica» de aspiraciones de trabajo institucionalmente protegido, consumo variado, relativismo y pluralidad culturales, participación en el entramado de la vida urbana, mejoramiento de las calificaciones laborales, etc.

## La encrucijada cultural: neopopulismo o desarrollismo

En términos culturales más amplios, lo que presenciamos hoy día en Chile es la definitiva (a veces abrupta) incorporación de la *modernidad* a la cultura de un país periférico, con una base económica pequeña, con desigualdades sociales profundas y unos grados relativamente aceptables de modernización en varios ámbitos de su gestión económica, política y social que coexisten con ámbitos de atraso y pobreza de una manera no dual sino compleja y entrecruzada.

Como ocurre con otras sociedades que han ingresado en una fase de «desarrollo interesante» —arrastrado por el sector exportador, con recursos humanos calificados,

con un aparato institucional relativamente estable, con élites desarrollistas, con una infraestructura comunicacional y de transportes que no está demasiado atrás de las exigencias, y con un flujo de inversiones que podría incrementarse y sostener ese «desarrollo interesante»—, en el caso de la sociedad chilena la *encrucijada cultural* se presenta ahora, en el postautoritarismo, como una tensión entre inclinar la balanza hacia el lado de alguna forma del neopopulismo o hacia el lado del desarrollismo.

En un extremo cabe prever una evolución cultural que, a falta de mejor término, llamamos *neopopulista*. Dicha alternativa engloba esa mezcla bien conocida de : hiperactivismo en la esfera política, uso del Estado como repartidor económico benevolente, intento por dar fácil solución a los problemas de la redistribución mediante acciones que eventualmente destruyen los equilibrios básicos de la economía y provocan stagnación e inflación, acomodamiento con los intereses corporativos de la sociedad como supuesto de un trueque político para satisfacer las necesidades de legitimidad del Gobierno, etc.

Simbólicamente, el neopopulismo juega en favor del principio del placer, asegurando a todos las menores exigencias a cambio de las mayores satisfacciones bajo el supuesto de que la democracia funciona repartiendo y que las elecciones se ganan en el bolsillo de la gente. El neopopulismo exalta por eso las funciones de la clase política y de las élites corporativas y sindicales, busca acercar la economía al Estado y la política, descuida la eficiencia en función de exigencias más benefactoras de legitimidad y se alimenta de ideologías que invocan el nacionalismo, al movimiento popular o a las masas, todas nociones transpartidarias, no programáticas y que en última instancia consagran la fusión de lo público con lo social y la subordinación de la economía a las regulaciones de la política.

El *desarrollismo*, a falta también de mejor término, se presenta en el otro extremo como la alternativa polar de evolución cultural en las condiciones actuales de la sociedad chilena.

Se trata, en este caso, de una cultura centrada en la producción, en el trabajo, en el ahorro y en la inversión. Que alimenta, de mil formas, una ética social orientada hacia el autodisciplinamiento bajo el supuesto que el crecimiento económico y la estabilidad democrática reposan sobre el principio de realidad; no el del placer.

El desarrollismo exige una cuota importante de «economicismo» en las orientaciones básicas de la sociedad. Por eso emplea extensamente los mercados y sus incentivos, a la par que reduce el peso de las relaciones político-económicas amparadas por el Estado benefactor. Más bien, el desarrollismo alimenta la noción del Estado eficaz que regula, interviene y evalúa su propio rendimiento en función de metas específicas y de la construcción de una economía capaz de incorporarse viablemente al comercio internacional. Inicialmente esa *viabilidad* podrá estar dada, como ha ocurrido en el caso chileno, por las «ventajas comparativas naturales» pero, poco después, exigirá fabricar esas «ventajas» a través del desarrollo de actividades productivas que incorporan valor agregado. De allí que la verdadera obsesión del desarrollismo viene a ser, a poco andar, la industrialización selectiva del país, asociada a un incremento

del componente tecnológico en la producción, a la búsqueda de mercados externos para sus productos y servicios y a la constante inversión en la gente, en la organización de los procesos, en la calidad de los productos, en las comunicaciones y la administración.

Una cultura desarrollista se relaciona con la democracia de manera diversa también. Mientras el neopopulismo está siempre bajo el riesgo de transformar la democracia en un fin del Gobierno y de la clase política, como plataforma donde transar intereses y compromisos corporativos, gremiales, sindicales y partidistas, el desarrollismo por el contrario percibe la democracia como una forma de organización de los procesos de competencia electoral y como una expresión institucionalizada de la participación en la sociedad civil. Por lo mismo, el desarrollismo busca mantener y reforzar la autonomía y separación relativa entre la esfera pública, la esfera económica, la esfera social y la esfera de la cultura. En vez de mezclar ámbitos e incentivar su funcionamiento de acuerdo a una común lógica de expansión de las relaciones económico-políticas, el desarrollismo busca promover los intereses específicos de cada esfera, con sus valores, comportamientos y expectativas asociados a cada una de ellas.

Al favorecer de tal manera una disociación (o especificación, mejor) de los varios ámbitos o subsistemas de la sociedad se fortalecen asimismo los procesos de especialización simbólica y de creciente división del trabajo que son necesarios en cada uno de ellos para incrementar su potencial de complejidad y de adaptación a los requerimientos externos e internos de funcionamiento y rendimiento eficaces.

Abandonando pues la idea de una cultura unitaria —que expresa el diseño premoderno de una nación sometida al designio (político o religioso) de sus élites, a la fuerza represiva de sus militares o al encuadramiento ideológico de un partido—, el desarrollismo se hace parte del movimiento de la modernidad, al que busca completar en el terreno de formación de una cultura capaz de conducir el desarrollo en su fase «más interesante»: la del tránsito posible hacia una sociedad industrial.

Pero esa cultura ya no es, no puede ser más, una cultura altamente integrada y tendencialmente unitaria. Ella se desarrolla, en cambio, por la vía de una especificación cultural de los sistemas, generándose con ello una diversidad de subculturas, cada una centrada en torno a sus propios ejes de valor: una cultura económica desarrollista, una cultura política democrática, una cultura de la sociedad civil que tolera el funcionalismo y una «cultura del espíritu» que acepta perder su primacía, su centro y su unidad y tolera, por lo mismo, las exigencias y los riesgos de la modernidad.

Tal vez allí estemos: a las puertas de ingresar en la democracia por el camino del crecimiento económico. De ser así, la suerte se jugará, en gran medida, en el terreno de la cultura.

**José Joaquín Brunner**